

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Lic. Inti Muñoz Santini, Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos: 9, 11 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 11 y 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 10 fracciones II y V y 21 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México; 29 y 40 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; y Décimo, fracción I del Decreto que Crea el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO, EJERCICIO FISCAL 2025

1. Nombre del programa social

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, fungirá como responsable de la implementación del Programa social “Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del Programa Vivienda en Conjunto, ejercicio fiscal 2025”, asimismo participarán la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda y la Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda, como áreas encargadas de revisar la documentación así como de notificar a la persona solicitante, la procedencia o no de su registro al programa social.

2. Alineación programática

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; en concordancia a lo anterior, en el artículo 6 de la Ley General del Desarrollo Social, la vivienda es uno de los derechos necesarios para el desarrollo social de las personas, esta tiene que ser adecuada y decorosa.

Este programa se alinea a las normas y derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México, tales como en el artículo 9 apartado E en el que se establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades. Asimismo, las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. Además de impulsar planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. En los artículos 11, 12, 13, 16 apartado E, por mencionar algunos, con el fin de contribuir a la construcción de una ciudad de libertades y derechos, universal, igualitaria, incluyente sin importar su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar, entre otras.

De conformidad y en los términos establecidos en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en específico del artículo 1, fracción VI, inciso c), el Instituto de Vivienda deberá diseñar estímulos, apoyos fiscales, créditos y subsidios para fomentar la construcción de vivienda de interés social y popular; asimismo, en su artículo 5 define a las ayudas de beneficio social como un complemento a la inversión recuperable y tiene por objeto que toda persona beneficiaria de los programas del Instituto haga realidad su garantía de derecho a la vivienda sin que para ello sea una limitante su capacidad de pago.

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México en su artículo 2, busca garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; asimismo, la aplicación de manera coordinada y concertada en todas las etapas de planeación, ejecución; en la sinergia de instrumentar los mecanismos que promuevan la participación informada, incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable, efectiva y solidaria de la sociedad en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, que permeen una cultura ambiental ciudadana, por medio del acceso a información y promoción de la participación, que favorezca la transformación de patrones, hábitos y costumbres de producción y consumo, amigables con el medio ambiente y la sustentabilidad.

Que se contempla la transversalidad con perspectiva de género, la igualdad sustantiva en la nueva legislación que, conforme a las políticas públicas de la Ciudad de México, se busca que los programas sean asequibles a los grupos vulnerables de mujeres, jefas de familia y en condiciones de violencia de género, consideradas en la Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

A nivel internacional, en el marco de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, el programa se inscribe en el Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, cuya meta es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, al crear los medios que aseguren el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles, asimismo mejorar los barrios marginales, y en este tenor, crear las líneas necesarias para aumentar la urbanización inclusiva y sostenible. En este sentido, acorde con el Objetivo 13 Acción por el Clima, una de sus metas es el incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

La Nueva Agenda Urbana (NAU) de las Naciones Unidas, reafirma la idea de que las ciudades y los asentamientos humanos deben de cumplir con su función social y ecológica, así como el lograr la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuada sin discriminación, el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad.

Asimismo, de la NAU se desprendieron herramientas como la “Vivienda y ODS en México” en la que se establecen los siete elementos de la vivienda adecuada, los cuales son: Seguridad de la tenencia; Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; Asequibilidad; Habitabilidad; Accesibilidad; Ubicación y Adecuación Cultural.

Además, en el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030, acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en el año 2015 en la Ciudad de Sendai, en Japón, se hace referencia a la responsabilidad que tiene el gobierno en prevenir y reducir el riesgo de desastres, en la medida en que estos puedan mejorar y aplicar eficazmente las políticas y medidas en reducción de desastres.

La Nueva Agenda Urbana Ilustrada refiere que los gobiernos pueden lograr sostenibilidad del medio ambiente promoviendo el uso de la energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo urbano, a través de la protección de los ecosistemas y la diversidad biológica, por medio de la adopción de medios de consumo y producción sostenibles, así como la promoción de la práctica de medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es el organismo encargado de la protección y realización del derecho a la vivienda de la población que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de vulnerabilidad requieren de la acción del Estado; en términos de su objetivo de creación, implementa el Programa “Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del Programa Vivienda en Conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ejercicio fiscal 2025”.

3. Diagnóstico

3.1 Antecedentes

De conformidad con su Decreto de Creación, el objeto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados principalmente a la población de escasos recursos económicos de la Ciudad de México. Dentro de sus atribuciones, se contempla el promover, estimular, fomentar y ejecutar programas de edificación, remodelación, regeneración y rehabilitación de vivienda en todas sus modalidades.

Para ello, desde su creación, el Instituto de Vivienda ha implementado el Programa Vivienda en Conjunto, cuyo objetivo es otorgar financiamiento para vivienda a través de diversas líneas o modalidades, optimizando el uso del suelo habitacional en las alcaldías que cuentan con servicios y equipamiento urbano disponible; a través de este programa se desarrollan

proyectos de vivienda en conjunto, en predios urbanos con propiedad regularizada, libre de gravámenes y uso habitacional; pueden ser inmuebles baldíos, ya sea con vivienda precaria, en alto riesgo, o susceptible de ser rehabilitada.

En el año 2001 con la finalidad de fortalecer los mecanismos para que las personas pudiesen acceder a una vivienda adecuada, se integran al financiamiento, las Ayudas de Beneficio Social por capacidad de pago (ABS), valoradas en el equivalente a 530 veces el salario mínimo (VSM), dirigidas a la población con ingreso individual de hasta 4.7 VSM, o familiar de hasta 7 VSM, con el objetivo de brindar suficiencia financiera a las personas beneficiarias del Programa Vivienda en Conjunto que, por su condición social y económica, no contaban con los recursos necesarios para cubrir el monto total de financiamiento. Además, si se tratase de una persona mayor, estas ABS (recursos no recuperables), podían equivaler al costo total de la vivienda.

En el año 2008, se incorporan nuevas políticas en materia de sustentabilidad en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, con lo cual se adiciona la línea de sustentabilidad con cargo a Ayudas de Beneficio Social, para la aplicación de diseños e instalación de equipos y mecanismos que permitieran la disminución de emisiones de bióxido de carbono, el ahorro de energía; el ahorro y manejo adecuado del agua en las viviendas financiadas por el Instituto, así como para cubrir el pago de renta de familias que habitaran inmuebles que por su nivel de riesgo requerían ser desocupados, estas últimas hasta el año 2020; las Ayudas de Beneficio Social serían otorgadas a través del Programa Social “Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social en el Programa Vivienda en Conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México”.

Desde el año 2001 hasta el 2020, la estrategia de entrega de ayudas de beneficio social (ABS) para pago de renta formaba parte del Programa de Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a personas beneficiarias del Programa Vivienda en Conjunto; sin embargo, derivado del trabajo en conjunto con las áreas, se puntualizaron problemáticas al implementar el programa social, tales como, una mínima comprensión por parte de la población de los requisitos a cumplir para las ABS para mecanismos de sustentabilidad, ABS por capacidad de pago y ABS pago de renta, así como la creación de la noción errónea de transitividad de una a otra ayuda.

Por lo que, para el ejercicio 2021, se llevó a cabo la elaboración de las reglas de operación para el otorgamiento de ABS para pagos de renta, en el que se definió de manera más clara y precisa los procesos de operación, requisitos, así como se definió la problemática a atender, la población potencial, objetivo y beneficiaria. En las actividades de definición de problema a atender, se destacó la diferencia entre capacidad de pago y riesgo estructural, que daba como resultado una población a atender diferente; así como problemáticas sociales distintas.

3.2 Identificación del problema público prioritario en conjunto con la ciudadanía

Por medio del presente programa se busca atender: uno, la emisión de gases de efecto invernadero; esto se logra a través de la implementación de esquemas de sustentabilidad para la disminución de los mismos, y, dos: la capacidad económica de las personas con ingresos bajos o muy bajos, en específico de las personas beneficiarias de algún financiamiento del Programa Vivienda en Conjunto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifiesta que el cambio climático constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales, y para abordar su impactos negativos, por medio del acuerdo de París, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), se presentaron los planes de acción climática, como contribuciones determinadas a nivel nacional, que cada país llevaría a cabo para una transformación económica y social, a fin de centrar sus esfuerzos hacia los objetivos a largo plazo, que implicaban el mantener el aumento global de la temperatura muy por debajo de los 2°C, asimismo limitarlo únicamente a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales.

El aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, promoviendo un desarrollo con bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), de modo que no se comprometa la producción de alimentos, formó parte de dichos objetivos; y por último el orientar los flujos financieros para lograr un desarrollo resiliente al clima y de bajas emisiones de GEI.

Para lograr la estabilización de las concentraciones de los GEI en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, en 1992, México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en ese mismo año fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y ratificada ante la ONU en 1993, entrando en vigor en 1994.

Para 2019 la Secretaría de Energía (SENER), mencionó que durante el periodo de 2011 a 2018 disminuyó el uso de petróleo y carbón, y hubo un ligero decremento en el uso de gas natural, al igual que se incrementó la eficiencia del sistema de generación de energía eléctrica limpia con la inauguración del parque eólico “Tres Mesas III” y con el parque fotovoltaico “La Orejana”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los principales gases responsables del efecto invernadero natural son: el vapor de agua, producido por la evaporación del agua; el dióxido de carbono, generado a partir de la respiración de los seres vivos, la descomposición de la materia orgánica muerta y los incendios naturales; el metano, emitido por los humedales y los rumiantes durante su proceso digestivo; óxido nitroso producido por la descomposición bacteriana de la materia orgánica; y el ozono, cuando resulta de la unión natural de tres átomos de oxígeno.

De acuerdo con datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI), en 2017, el gas más relevante que emitía nuestro país era el dióxido de carbono con 48% de las emisiones totales, seguido del metano con 19%. Para el periodo de 1990 – 2019¹, durante 2019 en México se emitieron 736.63 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂ e) que es la suma de las emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, trifluoruro de nitrógeno y hexafluoruro de azufre, multiplicados por su potencial de calentamiento global. Sin embargo, en el mismo se contabilizó una absorción (remoción) de 201.94 millones de toneladas de CO₂ por lo que se tuvo una emisión neta en el país de 534.69 millones de toneladas, siendo los tres principales el dióxido de carbono con el 67% de emisiones, seguido de las emisiones de metano con 24% y por último óxido nitroso con el 6%.

Para 2020 las emisiones netas de dióxido de carbono equivalente fueron de 716.6 millones de toneladas, en el que notó una disminución de la emisión de dióxido de carbono al representar el 65% del total de las emisiones, así como de óxido nitroso al representar el 5%, sin embargo, las emisiones de metano se incrementaron al representar el 27% del total. Para 2021 el comportamiento descendente se mantiene para el dióxido de carbono (64%) y para óxido nitroso (5%) sin embargo el comportamiento las emisiones de metano siguen incrementándose (28%).

Las emisiones de óxido nitroso se deben principalmente al uso de fertilizantes, al manejo de excretas y al tratamiento y eliminación de aguas residuales. Al igual que el metano, este gas ha tenido un incremento moderado del 45.35 por ciento respecto a 1990 y menor que el del dióxido de carbono; los hidrofluorocarbonos presentaron un crecimiento de 2,757 por ciento respecto al año de 1990; debido principalmente al aumento del uso de sistemas de refrigeración y aires acondicionados.

En los hogares, uno de los principales contaminantes que se utilizan son: los compuestos orgánicos volátiles (COV), en algunos casos son tóxicos y se encuentran contenidos en los productos de limpieza, aromatizantes y solventes, entre otros. En el año de 2016 se estimaron 164 mil toneladas de COV, de las cuales, el 69 por ciento de estos se emiten por fuentes de área consumo de solventes, almacenamiento de gas L.P, entre otros; siendo en el sector habitacional, las fugas de gas L.P. la principal fuente de emisión.

La Secretaría del Medio Ambiente, realizó un estudio sobre el sector habitacional, donde se determinó que 4 de cada 10 casas presentan fugas de gas natural, dichas fugas y la utilización de solventes representan más del 37 por ciento de los compuestos más utilizados en el sector comercial y doméstico.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 2.9 millones de viviendas, de las cuales el 60% es casa independiente, y el 40% departamento en edificio, vivienda en vecindad, vivienda en cuarto de azotea y local no construido para habitación, del total de viviendas el 40% tiene una antigüedad superior a los 26 años, cerca del 60% es propiedad propia o están proceso de pago, casi el 2% tiene acceso al agua, a través de captadores de lluvia, agua entubada que acarrearán de otra vivienda, agua de pipa y agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra.

De los hogares en la Ciudad de México, la distribución del gasto corriente se destina el 38% a alimentos, bebidas, y tabaco, seguido de los gastos destinados a transporte; adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos; comunicaciones con el 16% y 12% se destina a la vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles,

¹ <https://cambioclimatico.gob.mx/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos/>

tan sólo en estos tres rubros se destina casi el 70% del presupuesto total de los hogares, el 30% será destinado a gastos como vestido, calzado, cuidados de la casa, cuidados de la salud, servicios de educación, cuidados personales.

Sin embargo la situación difiere de acuerdo al sexo, a pesar de que la principal fuente de ingresos de los hogares es por remuneración por trabajo subordinado, este equivale al 51% del ingreso del hogar con jefatura femenina, mientras que representa el 57% en los hogares con jefatura masculina, asimismo, esta diferencia cambia de acuerdo a la situación conyugal de la mujer pues la participación que tienen en el ingreso corriente llega a ser superior del 60% cuando están casadas o en unión libre, y cuando son solteras con hijos, separadas, divorciadas o viudas esta participación llega a ser del 90%. Y en la distribución del gasto trimestral, cuando la jefatura del hogar es femenina los gastos destinados a la vivienda equivalen al 10% mientras que para la jefatura del hogar masculina, equivale al 9%. Lo que acentúa la incapacidad de generar o destinar presupuesto a las mejoras, rehabilitación de la vivienda, creando situaciones de riesgo o rezago en los hogares.

La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI, 2020), reporta que, en la Ciudad de México, de las 2.8 millones de vivienda existentes, el 26.9% son rentadas, donde el pago de la mensualidad es menor al costo de una hipoteca o bien no se tiene acceso a algún crédito o no se cuenta con recursos.

En seguimiento a lo anterior el 27% de las personas reportaron tener la necesidad de adquirir una vivienda, de los cuales se estima una demanda de alrededor de 800 mil viviendas, de estas casi el 95% se proyecta que sean construidas o compradas, en donde un poco más del 50% buscará tener financiamiento de una institución privada, préstamo informal o recursos propios.

Sí se considera que la población a beneficiar son personas que accedieron a un financiamiento para construcción de vivienda nueva; acorde a lo establecido en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, el financiamiento no puede exceder el 20 por ciento. Por lo que el gasto para incluir mecanismos de sustentabilidad a su vivienda nueva con un ingreso mensual a 1 vez el salario mínimo diario, le tomaría alrededor de 12 años implementarlos, además de la redistribución del gasto del hogar derivado de los gastos por construcción. Por lo que no se podría dar estabilidad económica a la familia.

Lo anterior, se encuentra acorde a los resultados obtenidos por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALÚA), por medio de la Metodología de la Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), y por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que señalan que el total de personas en pobreza aumentó un 3.1 por ciento del 2016 al 2018, y 1.6 por ciento en el periodo del 2018 al 2020; por lo que, para personas con ingresos de hasta 3 veces salarios mínimos; tiene mayor probabilidad de afectar la forma de gasto de su familia, en aras de tener una estabilidad de residencia a largo plazo, derivado de los medios en que pueda acceder a financiamientos, lo que provocaría la incidencia o inclusive agravar su situación de pobreza.

Tomando en consideración todo lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de generar las condiciones que permitan a las familias, con un nivel de ingresos bajo, tener un ambiente más sano y asequible, a través del Instituto de Vivienda, implementa las Ayudas de Beneficio Social (ABS) para mecanismos de sustentabilidad para que en el corto y mediano plazo, las familias en situación de vulnerabilidad por su nivel de ingresos, reflejen una disminución en el gasto de bienes y servicios; y a largo plazo se genere una mejora en el ambiente, a través de las disminuciones de gases efecto invernadero provenientes de los hogares.

Asimismo, por medio de las ABS por capacidad de pago se busca minimizar los efectos negativos en la distribución de gasto de las familias, con nivel de ingresos inferiores a 3 VSMD, y que las familias en situación de vulnerabilidad por su nivel de ingresos puedan acceder a una línea de financiamiento sin afectar de manera significativa los gastos de la familia.

Para el ejercicio 2024 se programó una meta de 1,961 ayudas de beneficio social para instalar esquemas de sustentabilidad con lo cual se estima disminuir la emisión de alrededor de 2.4 millones de $\text{KgCO}_2\text{equ}^*/\text{AÑO}$, en materia del gasto de las familias beneficiarias del programa social, en:

a) Ahorro de agua: con base en los datos reportados por ONU HABITAT, en 2021, el consumo promedio de agua en la Ciudad de México, por persona, fue de 366 litros, y el consumo residencial de 567 litros al día; con un promedio de 4 integrantes por familia, el consumo promedio sería de 1,464 litros y un consumo residencial de 2,268 litros al día; al mes el

consumo equivaldría a más de 44 mil y cerca de 69 mil litros, se estima que existe una disminución de al menos 40% de gasto.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, trimestralmente las familias gastan lo equivalente al 1.2% de su ingreso, en pago por el servicio de dotación de agua, lo que equivale a un monto aproximado de \$189 para una familia con ingresos equivalentes a 1 VSMD, y de al menos \$567 para una familia con ingresos de hasta 3.0 VSMD. Por lo que se disminuiría un monto aproximado de 70 a 200 pesos, del ingreso familiar, que al año significarían alrededor de 400 a 2,000 pesos.

b) Ahorro de energía: de acuerdo a la ENIGH, 2022; el promedio de focos ahorradores en las viviendas es de 8 y el 99.6 por ciento de las viviendas obtienen energía del servicio público; asimismo acorde a los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI, 2018); el tiempo promedio de uso de focos al día en la cocina es de 2 horas (h) 55 minutos (min); sala-comedor 2h 49 min; baños 1h 32 min, recámaras 2.28 min, otros espacios de la vivienda 2h 30 min. Se estima que una disminución de aproximadamente 77% de gasto por vivienda; sólo en el uso de focos, acorde a las tarifas vigentes.

En la Ciudad de México, la población que requiere acceder a un financiamiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se estima en alrededor de 300 mil personas; por nivel de ingresos (de 0.1 a 3.0 VSMD) se estima que un poco más de 135 mil personas requieren ayuda de beneficio social para acceder al financiamiento. De éstas, 80 mil cuentan con propuesta de proyecto o con registro en la bolsa de vivienda del programa.

La población objetivo, de acuerdo a la demanda estimada para esquemas de sustentabilidad, es un promedio de 2,500 personas; y por capacidad de pago se ha otorgado ABS a un promedio de 2,600 personas en el periodo 2018-2023. La población beneficiaria, con base en el presupuesto asignado durante el mismo periodo, ha sido de aprox. 2 mil 500 personas, ya sea por sustentabilidad o por capacidad de pago.

Impactos de las emisiones en el sector habitacional

El sector habitacional contribuye indirectamente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por el consumo de energía y combustibles fósiles. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el consumo residencial representa el 26% del total de energía eléctrica utilizada en México (INEGI, 2022). Además, se estima que el uso de combustibles como gas LP para cocinar y calentar agua genera alrededor del 15% de las emisiones domésticas de dióxido de carbono (CO₂) a nivel nacional.

El INECC (2023) señala que la implementación de tecnologías limpias, como calentadores solares, sistemas de captación de agua pluvial y focos ahorradores, puede reducir las emisiones residenciales hasta en un 30%. Estos mecanismos también contribuyen al ahorro en los gastos familiares en agua y electricidad, generando impactos positivos tanto ambientales como económicos.

Desafíos socioeconómicos en vivienda

El acceso a vivienda digna sigue siendo un problema central en la Ciudad de México. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2022), el 12% del gasto promedio familiar en la Ciudad de México se destina a vivienda, energía y servicios básicos. Sin embargo, este porcentaje aumenta hasta el 18% en hogares encabezados por mujeres con ingresos menores a tres veces el salario mínimo.

Un ejemplo concreto: en 2024 se ha registrado un incremento en las tarifas de consumo intermedio y excedente, impactando directamente a las familias encabezadas por mujeres, quienes en su mayoría tienen menos poder adquisitivo. Estas familias suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, por lo que el aumento en el costo de la electricidad significa una carga desproporcionada para ellas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que las mujeres en la Ciudad de México perciben ingresos alrededor de un 15% menores que los hombres en trabajos similares, una brecha que se vuelve aún más significativa en el contexto de los aumentos en los servicios esenciales (INEGI, 2021).

El acceso al agua también representa un reto importante. La Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica debido a la sobreexplotación de los acuíferos y la distribución desigual del recurso, lo cual afecta principalmente a las zonas con

mayores índices de pobreza, donde muchas de las jefas de hogar son mujeres. Este problema se agrava en los meses de mayor demanda, cuando los precios del agua aumentan y las familias se ven obligadas a destinar más recursos para asegurar un suministro adecuado. Las mujeres jefas de hogar, muchas de ellas en empleos informales o con ingresos irregulares, son quienes más sufren estos aumentos, ya que destinan una mayor proporción de sus ingresos a cubrir estos costos básicos, en detrimento de otras necesidades del hogar (SEDEMA, 2023).

Este panorama muestra una brecha estructural de género en el acceso a servicios básicos y a una vivienda digna en la Ciudad de México. Las mujeres jefas de hogar, quienes representan una parte significativa de las familias en la ciudad, se ven afectadas de manera desproporcionada por el incremento en el costo de servicios como la electricidad y el agua, además de enfrentar barreras para acceder a programas de vivienda. Para reducir esta desigualdad, es fundamental que se implementen políticas públicas que prioricen a estas mujeres, facilitando su acceso a subsidios para servicios básicos y programas de mejoramiento de vivienda. Asimismo, es urgente que se promuevan iniciativas que reduzcan la brecha salarial de género y reconozcan el trabajo no remunerado que estas mujeres realizan en sus hogares.

Las mujeres enfrentan desafíos específicos y estructurales que limitan su acceso a una vivienda digna, siendo uno de los principales obstáculos la desigualdad económica. Las brechas salariales son significativas, ya que las mujeres en México perciben, en promedio, un 15% menos que los hombres por trabajos de igual valor, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta realidad se agrava en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, como madres solteras o jefas de hogar, quienes destinan una proporción considerable de sus ingresos a gastos esenciales, lo cual limita su capacidad de ahorro y, por ende, de inversión en una vivienda adecuada. Adicionalmente, la alta concentración de mujeres en trabajos informales, caracterizados por la precariedad y la falta de seguridad social, reduce sus posibilidades de cumplir con los requisitos de financiamiento necesarios para obtener créditos hipotecarios o acceder a programas de mejoramiento de vivienda.

Otra barrera significativa que enfrentan las mujeres es la desigualdad en el acceso a créditos y subsidios para vivienda. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informa que casi la mitad de las mujeres en México (47%) no cuenta con acceso a servicios financieros formales, lo que limita sus opciones de financiamiento para la compra o mejora de una vivienda. Muchas de ellas no tienen un historial crediticio robusto, debido a una participación laboral intermitente o ingresos bajos, y se enfrentan a requisitos de ingreso estables que no pueden cumplir. Esta limitación restringe la capacidad de las mujeres para acceder a créditos y subsidios necesarios para mejorar sus condiciones habitacionales y mantener una estabilidad en sus hogares.

En situaciones de violencia de género, la carencia de una vivienda propia y segura se convierte en un factor de dependencia y, a menudo, en una trampa para muchas mujeres. La falta de alternativas habitacionales limita su posibilidad de escapar de entornos de abuso y violencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 66% de las mujeres mayores de 15 años en México ha experimentado algún tipo de violencia, y la falta de acceso a una vivienda segura es una de las barreras que perpetúa su situación de vulnerabilidad. Contar con un lugar propio y seguro es esencial para que estas mujeres puedan construir una vida independiente, alejada de la violencia, y para promover su seguridad física y emocional.

Por último, la infraestructura de muchas viviendas no está diseñada para atender las necesidades específicas de las mujeres, especialmente de adultas mayores, mujeres con discapacidad y madres de familia que requieren áreas adecuadas para el cuidado de sus hijos. En este sentido, las viviendas deben ser seguras y accesibles, con espacios funcionales y adaptados a las actividades domésticas y de cuidados. Un estudio realizado por ONU Mujeres en colaboración con el INEGI señala que las mujeres en México dedican hasta un 30% más de su tiempo que los hombres a las labores del hogar y al cuidado de dependientes, lo cual subraya la necesidad de contar con viviendas adaptadas para facilitar estas tareas. La falta de infraestructura adecuada limita la movilidad y seguridad, particularmente para mujeres mayores o con alguna discapacidad, y reduce la calidad de vida de quienes dependen del espacio habitacional para desarrollar actividades fundamentales de la vida diaria.

Estas limitaciones y barreras resaltan la importancia de implementar programas de mejoramiento de vivienda que consideren las necesidades específicas de las mujeres. Así, un programa de vivienda con un enfoque de género podría incluir apoyos financieros flexibles para mujeres en sectores informales, una línea prioritaria de acceso para mujeres en situaciones de violencia y mejoras en la infraestructura habitacional para asegurar viviendas seguras, accesibles y adaptadas a las exigencias de seguridad, privacidad y funcionalidad que requieren las mujeres en el día a día.

Por otro lado, la demanda de vivienda asequible supera la capacidad de oferta actual. El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2023) estima que la Ciudad de México requerirá al menos 700,000 viviendas adicionales para 2030 para satisfacer el crecimiento demográfico proyectado. No obstante, la mayoría de estas familias se encuentra en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, lo que dificulta su acceso a financiamientos convencionales.

Acciones y estrategias implementadas por el INVI

El INVI ha diseñado estrategias específicas para atender estos desafíos:

Ayudas de Beneficio Social (ABS): Estas ayudas han beneficiado a más de 3,000 familias por año desde 2018. En 2024, el presupuesto destinado a ABS para mecanismos de sustentabilidad permitió la instalación de sistemas de ahorro de agua en 2,176 hogares, lo que generó una reducción estimada de 1,800 toneladas de emisiones de CO₂ anuales (INVI, 2024).

Rehabilitación de viviendas en riesgo: A través de esquemas de financiamiento y apoyo técnico, el INVI logró rehabilitar más de 200 edificios en alto riesgo estructural en los últimos cinco años.

Promoción de tecnologías sustentables: La integración de paneles solares, calentadores solares y captadores de agua en nuevos desarrollos habitacionales se ha vuelto una prioridad estratégica.

El programa del INVI ha mostrado avances significativos en la reducción del rezago habitacional, pero aún enfrenta importantes retos estructurales y financieros:

Rezago habitacional: Según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el 24% de las viviendas en la Ciudad de México carecen de condiciones adecuadas de habitabilidad, ya sea por falta de acceso a agua potable, problemas estructurales o sobreocupación.

Limitaciones presupuestales: La capacidad del INVI para ampliar el alcance de las ABS depende directamente de la asignación de recursos públicos, que han mostrado una tendencia a la baja en términos reales desde 2020.

Desafíos ambientales: La reducción de emisiones residenciales requiere esfuerzos coordinados con otros sectores, como el industrial y el de transporte, para maximizar su impacto.

Por lo tanto, se propone continuar fortaleciendo las alianzas con organismos nacionales e internacionales, como el Banco Mundial y ONU-Hábitat, para financiar tecnologías sustentables y aumentar el alcance de los programas sociales de vivienda.

4. Objetivos y Líneas de acción

4.1 Objetivo General

El Programa “Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del Programa Vivienda en Conjunto, ejercicio fiscal 2025”, tiene como objetivo general: generar las condiciones que permitan a las familias (en especial aquellas familias con bajos o muy bajos ingresos) acceder a algún financiamiento en pro de ejercer su derecho a una vivienda adecuada y sustentable.

Y en sinergia, se busca que las familias tengan un ambiente más sano y asequible por medio de la implementación de mecanismos que permitan la captación de agua de lluvia, el uso de energías alternativas (solar), o de mecanismos que generen una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo anterior por medio de una transferencia monetaria, que permita la integración de mecanismos de sustentabilidad en la construcción de vivienda, y otra que permita el acceso a personas con bajos y muy bajos ingresos, a un financiamiento del Programa de Vivienda en Conjunto, a fin de reducir la brecha socioeconómica en materia de vivienda.

4.2 Objetivos específicos y líneas de acción

4.2.1. Objetivo específico de corto plazo: Apoyar a familias de la Ciudad de México para que generen los mecanismos para tener acceso a una vivienda adecuada y sustentable, mediante:

a) El otorgamiento de un Ayuda de Beneficio Social que permita instalar mecanismos de sustentabilidad en las viviendas, por un monto promedio de \$63,094.00 en beneficio de personas acreditadas por el Instituto. Dicho apoyo se entregará por única vez.

b) El otorgamiento de una Ayuda de Beneficio Social a personas con ingresos de 0.1 hasta 3.0 VSMD, que les permita tener la capacidad económica para cubrir el monto del crédito otorgado, por un monto estimado de entre \$16,015.00 hasta \$571,981.00 en beneficio de personas acreditadas por el Instituto.

4.2.2. Objetivo específico de mediano plazo: Apoyar a familias para que logren acceso a una vivienda adecuada y sustentable sin que ello merme su capacidad económica. El monto individual de ABS por capacidad de pago se calcula con base en la información económica de la persona, tal como su nivel de ingreso mensual, plazo de recuperación del crédito a adquirir, afectación salarial, grado de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

4.2.3. Objetivo específico de largo plazo: Apoyar a familias para que accedan a una vivienda nueva también lo hagan a un medio ambiente sano por medio de la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y a un ahorro en ciertos bienes y servicios por el uso de los mecanismos de sustentabilidad.

5. Definición de Población Objetivo y Beneficiaria

La población potencial es aquella que requiere acceder a un financiamiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se estima en alrededor de 300 mil personas.

La población objetivo es aquella con bajo nivel de ingresos (de 0.1 hasta 3.0 VSMD), susceptible de ser beneficiarias de ABS; se estima que un poco más de 135 mil personas se encuentran en esta situación. De esta población, actualmente poco más de 80 mil personas cuentan con propuesta de proyecto de vivienda o con registro en la bolsa de vivienda.

La población beneficiaria es aquella que recibe ayudas de beneficio social para implementar sistemas de sustentabilidad en sus viviendas. Para el ejercicio fiscal 2025, con base en el presupuesto asignado al Instituto, se estima atender a 2,825 personas con ayudas de beneficio social para implementar sistemas de sustentabilidad en sus viviendas.

De acuerdo a la demanda estimada para esquemas de sustentabilidad, es un promedio de 2,716 personas; y por capacidad de pago se ha otorgado ABS a un promedio de 2,600 personas en el periodo 2018-2024. La población beneficiaria, con base en el presupuesto asignado durante el mismo periodo, ha sido de aproximadamente 2 mil 500 personas, ya sea por sustentabilidad o por capacidad de pago.

Para el ejercicio fiscal 2025, con base en el presupuesto asignado al Instituto, se estima beneficiar a 2,825 personas con ABS por capacidad de pago.

Serán personas sujetas de atención prioritaria para el otorgamiento de las Ayudas de Beneficio Social, las personas que estén en los siguientes supuestos:

- Personas acreditadas del Programa Vivienda en Conjunto.
- Madres o padres solteros con dependientes económicos que acrediten vulnerabilidad.
- Jefas de familia con dependientes económicos, que acrediten vulnerabilidad.
- Personas mayores de 65 años.
- Población indígena.
- Personas con discapacidad.

Características que serán verificadas en las bases de datos en posesión del Instituto.

6. Metas Físicas

Para el ejercicio fiscal 2025 se ha proyectado beneficiar a 2,825 personas acreditadas con ayudas de beneficio social por un monto promedio de \$63,094.00, para aplicar sistemas de sustentabilidad en viviendas de familias acreditadas del Programa Vivienda en Conjunto, se destinan \$126,360,000.00 (Ciento veintiséis millones trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.); y beneficiar a 2,825 personas acreditadas con ingreso de hasta 3.0 VSMD, con ayudas de beneficio social por un monto de

entre \$16,015.00 hasta \$571,981.00 para favorecer su capacidad económica, se destina un presupuesto total de \$1,298,160,000.00 (Un mil doscientos noventa y ocho millones ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

De acuerdo a la atención brindada el 60% que corresponde a 1,695 de las personas beneficiarias son mujeres y el porcentaje el 40% son hombres, que corresponden a 1,130.

El monto individual de ABS por capacidad de pago se calcula con base en la información económica de la persona, tal como su nivel de ingreso mensual, plazo de recuperación del crédito a adquirir, afectación salarial, grado de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

En cumplimiento a los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales de la Ciudad de México, se da seguimiento a las observaciones surgidas de los ejercicios de evaluación; asimismo son aplicadas encuestas de satisfacción a las personas beneficiarias del Programa. Los resultados obtenidos formarán parte del capitulado de las propias Evaluaciones, mismas que serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el mes de junio posterior al ejercicio fiscal evaluado.

7. Orientaciones y Programación Presupuestales

Mediante del oficio SAF/SE/0723/2024 emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas se dio a conocer el Techo Presupuestal para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025.

El presupuesto total autorizado para este Programa Social para el ejercicio fiscal 2025, es de \$1,424'520,000.00 (Un mil cuatrocientos veinticuatro millones quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), que integra como sigue:

Ayuda de bienestar social (ABS) Sustentabilidad, por \$126,360,000.00 (Ciento veintiséis millones trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), para otorgar 2,825 apoyos económicos, al mismo número de personas, por un monto de \$63,094.00 en promedio cada uno para aplicar mecanismos de sustentabilidad.

Ayuda de bienestar social (ABS) Capacidad de Pago, por \$1,298'160,000.00 (Un mil doscientos noventa y ocho millones ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), para 2,825 ayudas de beneficio social al mismo número de familias vulnerables para que puedan completar el financiamiento de su vivienda, por un monto de entre \$16,015.00 hasta \$571,981.00.

Del total de presupuesto asignado se estima un gasto mensual de aproximadamente 118.7 millones de pesos, sin embargo, este gasto estará en función de las metas alcanzadas mensualmente, por lo que los montos pueden variar. El monto individual de ABS por capacidad de pago se calcula con base en la información económica de la persona, tal como su nivel de ingreso mensual, plazo de recuperación del crédito a adquirir, afectación salarial, grado de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

8. Requisitos y procedimientos de acceso

8.1 Difusión

Las presentes reglas de operación así como las modificaciones que llegasen a tener serán publicadas de manera oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, asimismo estas se difundirán vía electrónica por internet, en el sitio oficial del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México www.invi.cdmx.gob.mx, el Sistema de Información del Desarrollo Social <http://www.sideso.cdmx.gob.mx/>; y el Sistema de Información para el Bienestar <https://tubienestar.cdmx.gob.mx/index>.

También se realizará la entrega de trípticos, boletines informativos por medio de visitas a domicilios identificados con mayor vulnerabilidad por ingresos, de acuerdo a su estudio socioeconómico, a través de la calendarización que realice la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, área responsable de la implementación del programa.

Las personas acreditadas interesadas podrán acudir a solicitar mayor información a las instalaciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en la Coordinación de Integración y Seguimiento a la Demanda de Vivienda, ubicada en

Canela No. 660, 1er. Piso, ala "C", Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, el horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

8.2 Requisitos de Acceso

Para acceder a las Ayudas de Beneficio Social para mecanismos de sustentabilidad:

- Acorde a la política de vivienda amigable con el medio ambiente implementada por el Instituto, las Ayudas de Beneficio Social para implementar mecanismos de sustentabilidad se otorgan de manera directa a las personas acreditadas por el Programa Vivienda en Conjunto.

Para acceder a las Ayudas de Beneficio Social por capacidad de pago:

- Ser persona integrante de un proyecto de vivienda.
- Tener un ingreso de hasta 3VSMD.
- Tener un alto o muy alto grado de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

Características que serán verificadas en las bases de datos en posesión del Instituto

8.3 Procedimientos de acceso

Al ser las Ayudas de Beneficio Social un apoyo complementario al financiamiento otorgado por el Programa Vivienda en Conjunto, se parte de la solicitud presentada por medio del representante de un proyecto de vivienda, hasta el momento en el que de forma individual cada persona reúne los documentos solicitados; una vez elaborada la corrida presupuestaria es posible identificar la capacidad de pago de la persona (con ingreso de hasta 3.0 VSMD, condiciones de pobreza, y grado de vulnerabilidad, entre otros) y determinar si es o no susceptible de ser incorporado al programa.

Del proceso para ser beneficiario del Programa Vivienda en Conjunto se desprende los dictámenes técnico, financiero y social, mismos que son conjuntados por la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda a fin de realizar el análisis de los mismos y establecer una propuesta de financiamiento, en el que se incluirán los montos correspondientes a: total de financiamiento, ABS para sustentabilidad y ABS por capacidad de pago (sólo para personas con ingreso de hasta 3.0 VSMD). Por último, el expediente será presentado ante el Comité de Financiamiento para su aprobación y en su caso, dar continuidad al proceso de apertura de crédito.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Programa Vivienda en Conjunto, el cual tiene su fundamento en los artículos 4, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 fracción IV, de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México y las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuya finalidad es obtener los datos que permitan verificar que la persona beneficiaria de crédito cuenta con el perfil y cumple los requisitos para ser beneficiaria del Programa; estos datos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Congreso de la Ciudad de México y a las demás instancias jurisdiccionales, en cumplimiento a los requerimientos que en ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Asimismo, los datos de las y los beneficiarios salvo las excepciones previstas en la Ley, no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso.

Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al Programa Social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuáles en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.

El Instituto de Vivienda facilita el acceso al programa al publicar en su página web los requisitos, procedimientos de acceso, y formatos digitales necesarios. De esta manera practica la simplificación administrativa.

En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas de Operación.

Se prohíbe a las autoridades de la Ciudad de México, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar.

La Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda realiza el análisis de los documentos que integran el expediente y comprueba que se cumplan los requisitos de acceso al programa; establece los montos correspondientes a: total de financiamiento, ABS para sustentabilidad y ABS por capacidad de pago. Solicita únicamente los datos y documentos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si la potencial persona beneficiaria o derechohabiente cumple con los criterios de elegibilidad, mismos que tendrán que estar acordes con el tipo de población objetivo del programa: población acreditada por el Programa Vivienda en Conjunto, con ingreso de hasta 3.0 VSMD, mujeres madres solteras, adultos mayores, personas que acrediten vulnerabilidad, población indígena, entre otras.

En caso de presentarse una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos y la documentación a presentar, además de los procedimientos de acceso, para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.

En caso de tratarse de situación de emergencia en población migrante, de ser necesario, se proporcionarán apoyos sociales humanitarios, para lo cual cada programa establecerá las medidas correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Ningún procedimiento o requisito de acceso no previsto en las reglas de operación podrá adicionarse en otros instrumentos normativos o convocatorias del Programa.

En cumplimiento al principio de simplicidad administrativa, los requisitos y procedimientos de acceso son comprensibles, claros y sencillos, reduciendo espacios de intermediación o discrecionalidad innecesarios y promoviendo la aplicación directa de los recursos e instrumentos a movilizar.

En la medida de lo posible, se promueve la digitalización de trámites y procedimientos a fin de facilitar los procesos y ofrecer vías alternativas y complementarias a las presenciales de incorporación a los programas.

8.4 Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal

Son requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal:

- Declarar en falsedad
- Presentar documentos apócrifos
- Impedir el desarrollo de un proyecto
- Propiciar irregularidades en el proceso del ejercicio de la Ayuda de Beneficio Social.

Una vez autorizado el otorgamiento de la ABS, si el beneficiario desea cancelarlo deberá presentar su solicitud por escrito, dirigida a la persona titular de la Coordinación de Integración y Seguimiento a la Demanda de Vivienda, explicando los motivos de su decisión.

La ABS también podrá ser cancelada si la persona beneficiaria incurre en alguna falta a las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera. Lo anterior se fundamenta en lo establecido en el numeral 5.6.7 de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera vigentes, las cuales pueden ser consultadas en la dirección www.invi.cdmx.gob.mx. La Coordinación de Integración y Seguimiento a la Demanda de Vivienda, ubicada en Canela No. 660, primer piso, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, C.P.08400, con horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

9. Criterios de selección de la población beneficiaria

De acuerdo a lo establecido en el apartado 4.6 Sujetos de Crédito y de las Ayudas de Beneficio Social de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, serán sujetos del beneficio de ABS, las personas físicas que cumplan con varias características entre las cuales destaca: “Tener un ingreso de hasta de 5 VSMD de manera

individual, o ingreso familiar máximo de hasta 8 VSMD”. Sin embargo, debido a que los recursos con los que cuenta el programa son limitados, se focalizará la entrega de ayudas de beneficio social, de manera prioritaria, a las personas acreditadas del Programa que acrediten ingreso de hasta 3.0 VSMD y un alto o muy alto grado de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

Serán sujetos de atención prioritaria aquella población que por su condición sea sujeta de discriminación o se vulneren sus derechos.

10. Procedimientos de instrumentación

10.1 Operación

Al ser las Ayudas de Beneficio Social, una herramienta complementaria al financiamiento que otorga el Instituto, los procedimientos de operación se manejan de forma simultánea, por lo que a continuación se describen de forma breve, así como las áreas que en ellos participan.

Para el otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social para instalar mecanismos de sustentabilidad y por capacidad de pago:

La Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, es el área que recibe la solicitud por escrito por parte del (los) representante(s) del grupo de solicitantes y la turna para su atención, a la Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda.

La Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda recibe, revisa y turna la solicitud a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda para que solicite a las áreas correspondientes los dictámenes Jurídico, Técnico y Social, que determinan la factibilidad del otorgamiento del financiamiento solicitado.

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda recibe la solicitud de financiamiento, elabora oficio de solicitud a la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Contenciosos requiriendo el Dictamen Jurídico correspondiente, recaba la firma de la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda y turna el oficio firmado a la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Contenciosos.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos y Contenciosos recibe la solicitud, la documentación anexa, revisa y elabora el Dictamen Jurídico, especificando la(s) línea(s) de financiamiento procedentes. Entrega el oficio con Dictamen Jurídico anexo, a la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda.

La Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda recibe y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda el Dictamen Jurídico. La Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda elabora oficio por medio del cual solicita la elaboración del Dictamen Técnico a la Coordinación de Asistencia Técnica, recaba la firma de la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, y turna el oficio firmado a la Coordinación de Asistencia Técnica.

Posterior a que la Coordinación de Asistencia Técnica recibe la solicitud, con la documentación anexa, procede a revisar y elaborar el Dictamen Técnico, especificando la(s) línea(s) de financiamiento procedentes, y entrega oficio con Dictamen Técnico anexo, a la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda.

La Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda el Dictamen Técnico. Posteriormente la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda solicita, mediante Nota Informativa, a la Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos, elabore el Dictamen Social.

La Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos recibe, revisa e instruye mediante Nota Informativa al Enlace de Integración de Padrón de Beneficiarios para que elabore el Dictamen Social, indicándole que, en caso de no contar con los elementos para la elaboración del Dictamen, lo informe por escrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda.

El Enlace de Integración de Padrón de Beneficiarios revisa los antecedentes del predio e integra el padrón de beneficiarios conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI e informa el resultado a la Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos.

La Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos convoca mediante oficio al representante del grupo de solicitantes de crédito a reunión de trabajo para proporcionarle información pertinente para la conformación del padrón de beneficiarios: Informa al representante acerca de los criterios para la integración del padrón de beneficiarios, según lo establecido en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI, y le indica que deberá solicitar por escrito la fecha para la aplicación de la Cédula Única de Información Socioeconómica a la Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda.

La Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda recibe la solicitud del representante del grupo de solicitantes de financiamiento para la aplicación de la Cédula Única de Información Socioeconómica y la turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos para que programe la aplicación de las cédulas.

La Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos recibe la solicitud y programa en la agenda electrónica la fecha y hora en que deberán presentarse los solicitantes de financiamiento para la aplicación de la Cédula Única de Información Socioeconómica. Y notifica al representante del grupo de solicitantes de financiamiento mediante oficio, con anexo descriptivo de la documentación requerida y suscrito por la Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda, la fecha y hora en que deberán acudir personalmente los solicitantes de financiamiento para la aplicación de la Cédula Única de Información Socioeconómica.

En la fecha programada para la aplicación de la Cédula Única de Información Socioeconómica, recibe la documentación en original y copia de cada uno de los solicitantes de financiamiento, y determina si cumple con los requisitos establecidos.

En caso de que no se cumpla con los requisitos establecidos se informará al solicitante de financiamiento sobre la documentación faltante y se reprogramará una nueva fecha para requisitar la cédula. En caso contrario se captura en la Cédula Única de Información Socioeconómica los datos personales del solicitante de crédito, así como datos complementarios.

La Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos imprime el documento, una vez requisitada la Cédula Única de Información Socioeconómica, y lo pone a disposición del solicitante para revisión y firma de conformidad. Si es correcta se imprime en dos tantos el formato denominado "Relación de Documentos en Expediente Individual", se entrega un tanto al solicitante como comprobante, quien firma en el tanto restante como acuse de recibo.

Se canalizan las Cédulas Únicas de Información Socioeconómicas aplicadas al Enlace de Integración de Padrón de Beneficiarios y le instruye para que elabore el Dictamen Social. De conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI, generando en el sistema electrónico el Dictamen Social, así como el Padrón de Titulares, Complementarios y Padrón de Co-acreditados, y lo entrega de forma impresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos para su revisión y firma.

La Jefatura de Unidad Departamental de Estudios Socioeconómicos recibe el Dictamen Social para recabar las firmas de la Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda y de la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, lo entrega una vez firmado a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda con acuse de recibo.

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda recibe el Dictamen Social, lo revisa y de acuerdo a lo dispuesto en los Dictámenes Jurídico y Técnico, elabora el Dictamen Financiero, corrida Financiera y la Ficha de presentación al Comité de Financiamiento, los integra al expediente y lo envía a la Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda para su revisión y firma.

Con base en la información obtenida de la corrida financiera, se procede a analizar la capacidad de pago a largo plazo, del crédito total de la persona, sin rebasar el porcentaje máximo (20%) del ingreso total destinado al pago del financiamiento; en caso de que la persona no tenga la suficiencia económica y acredite un ingreso de hasta 3.0 VSMD se le aplicará un apoyo financiero de entre \$16,015.00 y hasta \$571,981.00 por concepto de Ayudas de Beneficio Social por capacidad de pago. Tal monto se aplicará al crédito otorgado y se desglosará en el contrato del financiamiento.

En concordancia con la política en materia de cambio climático, la política de sustentabilidad del Instituto promoverá la disminución de emisiones de bióxido de carbono, el ahorro de energía, el ahorro y manejo del agua, por lo que las Ayudas de Beneficio Social para mecanismos de sustentabilidad se integran a todos los proyectos de vivienda financiados por el Instituto.

La Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda recibe, revisa, firma y envía a la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda para su autorización y firma, ésta recibe, revisa, firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda.

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Captación de Demanda presenta ante la Subdirección de Finanzas, el Dictamen Financiero, para obtener la suficiencia presupuestal.

Una vez obtenida la suficiencia presupuestal se integra en el expediente, junto con los dictámenes Jurídico, Técnico y Social, para la incorporación del caso a la Carpeta de Comité de Financiamiento correspondientes al Programa de Vivienda en Conjunto.

Por último, elabora oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas informando los predios que integran la carpeta de la Sesión del Comité de Financiamiento, firmado por la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda.

La Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda asiste a la Sesión del Comité de Financiamiento con ejemplar de Carpeta de Comité de Financiamiento y presenta cada uno de los casos contenidos. Posteriormente consulta los acuerdos emitidos por el Comité de Financiamiento en el sistema electrónico y, de aprobarse el financiamiento, instruye a la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda elaborar las fichas de pagos accesorios al crédito.

Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional generada y administrada, se registrarán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.

De acuerdo con en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, deben llevar impresa la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos.

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral.

La ejecución del programa social se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su vinculación con el gobierno en turno, algún partido político, coalición o candidatura particular.

Queda prohibida, en cualquier contexto y en particular durante procesos o campañas electorales, la utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito Federal, de la Ciudad y de las Alcaldías con la finalidad de promover la imagen personal o inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Asimismo, los Partidos Políticos, Coaliciones, personas candidatas o funcionarias públicas, no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno. La violación a esta prohibición será sancionada en los términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y otras disposiciones legales. Las personas servidoras públicas no podrán utilizar ni aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres ocasionados por fenómenos naturales y protección civil. Las personas ciudadanas tendrán derecho a presentar quejas o reclamaciones relacionadas con la utilización inadecuada o electoral de programas

sociales ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y ante el resto de los órganos competentes para investigar infracciones de dicha índole.

10.2 Supervisión y control

Las actividades a desarrollar serán vigiladas y supervisadas por la persona titular de la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda, mediante un sistema de asignación y control de las actividades del personal adscrito al área, que serán supervisadas constantemente por la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda; de manera mensual esta reportará a la Dirección General del Instituto de Vivienda el avance en indicadores, metas programadas, y de manera trimestral rendirá los informes de gestión correspondientes.

El Órgano Interno de Control de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía, responsable de instrumentar la política social en la Ciudad de México tendrá a su cargo la supervisión y control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad de México, a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca.

11. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana

En caso de existir alguna inconformidad derivada del mecanismo de acceso a los programas sociales del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, las y los interesados podrán presentar sus quejas o inconformidades por escrito, que deberá contener el nombre completo de la o del interesado, dirección y en su caso número telefónico, así como una descripción de la inconformidad.

El escrito deberá ir dirigido al titular de la Dirección General de Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. El área de recepción será únicamente por medio de la Oficialía de Partes del INVI, ubicada en Calle Canela, Número 660, Col. Granjas México, Planta Baja, C. P. 08400, Alcaldía Iztacalco, en un horario de lunes a jueves de 10:00 a 17:00 horas y los días viernes de 10:00 a 14:00 horas.

En caso de persistir la inconformidad derivada del mecanismo de aplicación de los programas sociales del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, las y los inconformes podrán presentar sus quejas o inconformidades por escrito, que deberá contener el nombre completo de la o el interesado, dirección y en su caso número telefónico, así como una descripción de la inconformidad. El escrito deberá ir dirigido al titular de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México. Las áreas de recepción de los escritos serán únicamente las oficinas ubicadas en Av. Arcos de Belén #2, Piso 16, Col. Doctores, C.P. 06720, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en la implementación, seguimiento o evaluación del Programa Social. La violación a esta disposición será sancionada conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED y/o exponer su queja a través del correo electrónico: quejas.copred@gmail.com y/o a la Línea No Discriminación: 55 56581111, para su investigación.

Así mismo las y los posibles afectados podrán exponer su queja a través de la página web del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México: <http://www.invi.cdmx.gob.mx>, en el portal anticorrupción (<http://juntoscontralacorrupcion.cdmx.gob.mx/>).

En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

El Órgano Interno de Control del Instituto, ubicado en Canela Núm. 660, 4º. Piso, Ala "B", colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, recibe escritos de quejas e inconformidades, mismas que son remitidas a la Secretaría de la Contraloría General, quien emitirá las respuestas conforme a la normatividad aplicable. Es importante registrar en el escrito de queja o inconformidad un número telefónico y/o dirección electrónica al cual será dirigida la respuesta.

En los escritos de inconformidad dirigidos a cualquiera de las instancias antes mencionadas, el quejoso deberá indicar con precisión qué punto de las Reglas de Operación, o de la normatividad aplicable considera que se está violando, o que trámite se omitió realizar por parte del servidor público adscrito al Instituto.

Se Informa que el mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL (01800 433 2000).

12. Mecanismos de exigibilidad

La normatividad, procedimientos, mecanismos de instrumentación y de acceso a los programas operados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México pueden ser consultados en la página de internet: www.invi.cdmx.gob.mx, y en carteles en las áreas de atención externas y las ubicadas al interior de la sede principal del Instituto ubicado en calle Canela, número 660, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400.

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al menos los siguientes:

- a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
- b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
- c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.

Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

- a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de sus derechos;
- b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la normatividad aplicable;
- c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal;
- d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable;
- e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales;
- f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;
- g) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable a cada programa social.

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.

Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se deberá de señalar de manera textual que: “Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, protección y garantía de sus derechos; cancelación

y oposición, en los términos de la normativa aplicable; c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable; e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación. h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada programa social.

Toda persona beneficiaria o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión o baja del programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos.

Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en la Ley de Archivos de la Ciudad de México y previa publicación del Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación.

13. Seguimiento y evaluación

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la política y programas de desarrollo social. Así, las evaluaciones deberán detectar sus aciertos y fortalezas, identificar sus problemas y, en su caso, formular las observaciones y recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento.

13.1. Evaluación interna y externa

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, la evaluación constituye un proceso integral y sistemático que permite conocer, explicar y valorar el diseño, la formulación, la implementación, la operación, los resultados, e impacto de las políticas, programas, estrategias, proyectos de inversión o acciones de los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías en el bienestar social, la calidad de vida, la pobreza, las desigualdades, la mitigación de riesgo y reducción de la vulnerabilidad ante desastres, los derechos humanos y, en su caso, formular las observaciones y recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento.

La evaluación será interna y externa, las cuales tendrán por objeto detectar deficiencias y fortalezas; constituirá la base para formular las observaciones y recomendaciones para el fortalecimiento, modificación o reorientación de las políticas, programas, proyectos de inversión y acciones de gobierno.

En el caso de la evaluación interna, su finalidad es dar cuenta de los aciertos y fortalezas de los programas sociales ejecutados, identificar sus problemas y áreas de mejora y, con ello, formular sugerencias para su reorientación o fortalecimiento; al igual que proporcionar a las y los funcionarios la oportunidad de identificar las condiciones iniciales del programa social y hacer un seguimiento permanente del mismo a través de evaluaciones periódicas o parciales.

Será realizada anualmente por los entes de la Administración Pública y las Alcaldías que ejecuten programas sociales, conforme a los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Se basará en el Mecanismo de Monitoreo para ajustar, actualizar o modificar los programas.

13.2 Evaluación

Con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y artículo 8 de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, contempla dentro de sus atribuciones del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México es llevar a cabo la evaluación externa de las políticas, programas, estrategias, proyectos de inversión y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías, en materia de desarrollo social, económico, urbano y rural; así como medio ambiente y seguridad ciudadana; en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.

Con base en el artículo 27 de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México la evaluación externa tendrá por objeto revisar periódicamente el diseño, la implementación, los resultados y el impacto de las políticas públicas, programas, proyectos y, en general, las acciones institucionales que implementen los entes de la Administración Pública y las Alcaldías en las áreas de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y su grado de contribución para el acceso y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución; emitir observaciones y recomendaciones vinculatorias, destinadas a la orientación de mejoras a las políticas, programas y acciones; dar seguimiento y analizar el impacto de las políticas, los programas, los proyectos y las acciones del Gobierno Federal que tengan incidencia en la población de la Ciudad, y generar opiniones que serán consideradas en el proceso presupuestario e incidirán en la orientación del gasto público.

La Evaluación Externa se realizará de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México en términos de los artículos 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 8, fracción I y 27 de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México.

De acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el área responsable de coordinar la evaluación de los programas sociales es la Coordinación de Planeación, Información y Evaluación.

Las fuentes de información utilizadas para la elaboración del diagnóstico y el desarrollo de la Evaluación Interna serán:

- Proyecciones de Población, Hogares y Vivienda, CONAPO.
- Censos de Población y vivienda, INEGI.
- Estadísticas de Vivienda e información de Metas Programadas, CONAVI.
- Información sobre metas programadas e Información generada por la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de o Programas de Vivienda.
- Estadísticas Internas, SINTEV.
- ONU-HABITAT.
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

14. Indicadores de gestión y de resultados

Conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML), se presentan los indicadores de cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación:

Nivel del Objetivo	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Desagregación	Medios de Verificación	Unidad Responsable	Supuestos	Metas
Fin (capacidad de pago)	Contribuir a que las familias con ingresos de hasta 3.0 VSMD accedan a un financiamiento a fin de ejercer su derecho a una vivienda adecuada y sustentable.	Porcentaje representativo del monto promedio de la ABS respecto al ingreso de las personas de 0.1 a 3.0 VSMD	$\% \text{ representativo del monto promedio otorgado por capacidad de pago} = \frac{[(\text{monto promedio mensual de la ABS}) / \text{monto total de ingresos en rango de VSMD}]}{100}$	Universidad	Porcentaje	Trimestral Anual	Por ingresos por número de veces salarios mínimos diarios	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	Los procedimientos se cumplieron en tiempo y forma	2,825 ABS por capacidad de pago
Propósito (mecanismos de sustentabilidad)	Contribuir a la disminución en el gasto de las familias beneficiarias de ABS del Programa Vivienda en Conjunto	Reducción esperada de gasto de los hogares de las personas beneficiarias del programa social	$\text{Red. Esp.} = (\text{Precio vigente por kW} * \text{tiempo de uso bimestral del total de focos}) * (\text{número de viviendas})$	Suficiencia	Equivalencia monetaria	Trimestral Anual	Equivalencia monetaria por tipo	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	Consistencia en los precios de servicios	2,825 ABS para esquemas de sustentabilidad

Nivel del Objetivo	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Desagregación	Medios de Verificación	Unidad Responsable	Supuestos	Metas
Componentes (mecanismos de sustentabilidad)	Promover acciones que permitan a las personas incorporar mecanismos de sustentabilidad en sus viviendas	Porcentaje de personas beneficiarias respecto al total de población objetivo del programa social	$(\text{Total de personas beneficiarias}) / (\text{Total de población objetivo estimada})$	Cobertura	Porcentaje	Trimestral Anual	Total, de Población Atendida	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	El presupuesto asignado fue suficiente.	Atender el total de las solicitudes
		Porcentaje de personas beneficiarias por sexo	$(\text{Total de personas beneficiarias por sexo}) / (\text{Total de personas beneficiarias con mecanismos de sustentabilidad})$	Cobertura	Porcentaje	Trimestral Anual	Total, de Población Atendida	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	El presupuesto asignado fue suficiente.	Atender el total de las solicitudes

Nivel del Objetivo	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Desagregación	Medios de Verificación	Unidad Responsable	Supuestos	Metas
Componentes (capacidad de pago)	Generar mecanismos que permitan el acceso a un financiamiento para vivienda	Porcentaje de atención brindada, por nivel de ingresos, de las personas beneficiarias	(Total de población beneficiaria por rango de ingresos) / (Total de población beneficiaria del programa)	Cobertura	Porcentaje	Trimestral Anual	Total de Población Atendida	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	El presupuesto asignado fue suficiente.	Atender el total de las solicitudes
		Porcentaje de atención brindada, por sexo, de las personas beneficiarias	(Total de población beneficiaria por sexo) / (Total de población beneficiaria del programa por cap. Pago)	Cobertura	Porcentaje	Trimestral Anual	Total de Población Atendida	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	El presupuesto asignado fue suficiente.	Atender el total de las solicitudes
Actividades (mecanismos de sustentabilidad)	Crear los medios que permitan la instalación de los mecanismos de sustentabilidad	Porcentaje de avance de obra por proyecto	Porcentaje de avance de obra por proyecto	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral Anual	Total de acciones por proyecto	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	Los proyectos de obra se llevan en el tiempo previsto.	Concluir el mayor número de proyectos de obra.

Nivel del Objetivo	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Desagregación	Medios de Verificación	Unidad Responsable	Supuestos	Metas
Actividades (capacidad de pago)	Crear los medios que permitan a las personas con ingresos de hasta 3.0 VSMD, tener la capacidad de pago del financiamiento para vivienda	Porcentaje de personas por rango de ingresos	Porcentaje de personas por rango de ingresos menores de hasta 3.0 VSMD beneficiadas = Total de personas por rango de ingresos / total de personas financiadas del Programa	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral Anual	Total de Población Atendida	Informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de metas	DEPF PV	Las condiciones socio-económicas no sufren estragos.	Acceder a las personas con menores ingresos.

La Coordinación de Planeación, Información y Evaluación reportará al Consejo de Evaluación de la Ciudad de México los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social, de forma acumulada, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados.

15. Mecanismos y Formas de Participación Social

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Ley de Evaluación de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, dentro de los cuales se encuentran:

- H. Consejo Directivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
- Comité de Financiamiento.
- Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Participante	Etapa en la que participa	Forma en la que participa	Modalidad	Alcance
Contralor Ciudadano	Deliberación y toma de decisiones durante las sesiones del órgano de gobierno y órganos colegiados, ya sea en la planeación, programación, implementación y evaluación.	Individual o Colectiva.	Participación no institucionalizada.	Proporcionan información de acuerdo a su conocimiento en la toma de decisiones.

16. Articulación con Políticas, Programas, Proyectos y Acciones Sociales

Los apoyos que otorga el INVI son recursos monetarios aplicados en materia de construcción de vivienda social, que incluyen características de sustentabilidad a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias de la Ciudad de México, así como apoyar a las personas con ingreso de hasta 3.0 VSMD que por su nivel de capacidad de pago no tengan los medios para cubrir el pago de su financiamiento, por lo que no existe complementariedad o duplicidad de forma articulada con otros programas sociales operados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Programa o Acción Social con el que se articula	Dependencia o Entidad responsable	Acciones en las que colaboran	Etapas del Programa comprometidas
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

17. Mecanismos de Fiscalización

Por medio del acuerdo CCSGBS/SO/I/08/2025 emitido por la Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social en su Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de enero de 2025, fue aprobado el Programa Social Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del Programa Vivienda en Conjunto, 2025, ejercicio fiscal 2025.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación.

Serán remitidos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como parte del informe trimestral, los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el caso, por alcaldía y colonia.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, verificará que el gasto guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

Se proporcionará la información que sea solicitada por la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX y/o los Órganos Internos de Control, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.

El Órgano Interno de Control vigilará, en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa.

Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución.

18. Mecanismos de Rendición de Cuentas

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio de internet del portal de transparencia del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México <https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/instituto-de-vivienda-de-la-ciudad-de-mexico>.

Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello.

La siguiente información del programa social será actualizada trimestralmente: Área; denominación del programa; periodo de vigencia; diseño, objetivos y alcances; metas físicas; población beneficiada estimada; monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; requisitos y procedimientos de acceso; procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; mecanismos de exigibilidad; mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; formas de participación social; articulación con otros programas sociales; vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; vínculo a la convocatoria respectiva; informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y el resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa.

19. Criterios para la Integración y Unificación del Padrón Universal de Personas Beneficiarias o Derechohabientes

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, Apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie que realicen el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón único, transparente y enfocado a la rendición de cuentas.

Con base en el Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en la Ciudad de México existirá un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas operados, que contendrá la información sobre la totalidad de las personas que acceden a los diversos programas de desarrollo social. Dicho padrón unificado y los programas serán auditables en términos de la legislación por los órganos facultados para ello.

Se entenderá por padrón de beneficiarios a la relación oficial de personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente (ya sea reglas de operación o leyes particulares que dan origen al programa social).

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo del ejercicio inmediato posterior del que se trate, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y delegación, ahora alcaldía. Dicho padrón estará ordenado en orden alfabético en el formato para la integración de padrones de beneficiarios de programas sociales de la Ciudad de México, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México ha diseñado. De igual forma se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole.

Considerando que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México ha diseñado.

A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las Dependencias de la Administración Pública local, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México entregará el respectivo padrón de beneficiarios a la Secretaría de la Contraloría Social a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca

Cuando le sea solicitado, el Instituto de Vivienda otorgará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México e implementado por la misma Secretaría de la Contraloría General. Los resultados del mismo serán presentados al Congreso de la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley, los datos personales de los beneficiarios.

De acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se publicará en formato y bases abiertas, de manera trimestral, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de cada uno del programa social operado por el Instituto de Vivienda, el cual estará conformado de manera homogénea y contendrá las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, alcaldía, beneficio otorgado y monto del mismo, en el portal de transparencia del Instituto de Vivienda

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/instituto-de-vivienda-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/122> y en el portal Nacional de Transparencia <https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml>.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos.

Se diseñarán, establecerán e implementarán los mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y subsanar posibles errores de inclusión o exclusión en los padrones de beneficiarios de acuerdo a los objetivos del programa y a la población definida.

Asimismo, se diseñarán e implementarán los mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y evitar cualquier utilización discrecional, política o comercial de los datos personales contenidos en los padrones de beneficiarios.

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales y de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el **AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO, EJERCICIO FISCAL 2025.**

Segundo. El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 24 de enero de 2025

(Firma)

LIC. INTI MUÑOZ SANTINI

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO